

Suprema Corte:

I

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó a L B M y L F E a la pena de prisión perpetua, por considerarlos responsables de delitos de lesa humanidad, y dispuso sus inmediatos alojamientos en unidades del Servicio Penitenciario Federal, tras revocar las detenciones cautelares domiciliarias que les habían sido otorgadas (fs. 2/5 vta.).

Las defensas de ambos condenados impugnaron tal revocación al considerarla arbitraria. Por un lado, cuestionaron que el tribunal haya ordenado la inmediata detención en la cárcel sin brindar los fundamentos de la decisión, en tanto la lectura integral de la sentencia se postergó en los términos del artículo 400 del código ritual; por otro lado, afirmaron que M y E cumplen con el requisito etario para permanecer detenidos en sus domicilios, además de presentar condiciones de salud que así lo aconsejan (artículo 32, letras "a" y "d", de la ley 24.660) (fs. 13/18 vta. y 19/30 vta.).

La Sala de FERIA de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a esos recursos, con base en que la lectura de la parte dispositiva del fallo no es suficiente para revocar las detenciones domiciliarias (voto de los jueces Riggi y Cabral). Por su parte, la doctora Ledesma votó en el mismo sentido, pero aclaró que se trataba de una opinión momentánea, hasta tanto se dieran a conocer los fundamentos de la decisión impugnada, o bien se contara con los legajos de personalidad de los condenados a fin de poder evaluar sus respectivas situaciones (fs. 138/140 vta.).

Contra esa decisión, el fiscal general interpuso recurso extraordinario (fs. 219/232 vta.), que fue concedido a fojas 245 y vta.

II

Considero que el recurso extraordinario es formalmente procedente, en razón de lo expuesto por la señora Procuradora General en el dictamen emitido el 23 de mayo del corriente en el caso T. 13, XLIX, "Torra, Miguel Ángel s/causa n° 15.838", al que en este aspecto me remito en beneficio de la brevedad.

III

En cuanto al fondo del asunto, cabe subrayar que en este caso no están en discusión los presupuestos de la detención cautelar, en tanto no se ha cuestionado que M y E , condenados por sentencia no firme, deban permanecer privados de su libertad. Lo que se discute, en cambio, es la modalidad de esa detención.

Sobre este tema, la señora Procuradora General, en el dictamen citado, ha sostenido que "la ley 24.660, al establecer no la obligación, sino la facultad de los jueces de conceder la detención cautelar domiciliaria, entre otros, a los imputados mayores de 70 años, no indica qué otros requisitos se deberían considerar a ese fin", por lo que añadió que, para evitar arbitrariedades, "habría que tener en cuenta los objetivos de la ley".

Y tras afirmar que el beneficio en cuestión está encaminado a evitar el trato cruel, inhumano o degradante del detenido o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar, concluyó que para concederlo, incluso a un imputado mayor de aquella edad, se deberían brindar argumentos que demostraran que el encarcelamiento, a raíz de las condiciones personales excepcionales del sujeto de la medida, provocaría alguna de esas dos consecuencias.

En síntesis, este Ministerio Público considera que sólo en ese caso la concesión de la detención domiciliaria estaría bien fundada.

IV


El último 8 de febrero, el tribunal oral provincial dio a conocer los fundamentos de su sentencia, entre los cuales se encuentran aquellos referidos al punto aquí controvertido (cf. fs. 404/413 de la copia simple de la sentencia, registrada en el disco compacto adjuntado a fs. 210 de este legajo). Esos fundamentos no fueron analizados por el *a quo*, en cuanto no se habían difundido aún al momento de pronunciarse la decisión impugnada por el recurrente.

Por lo tanto, al tener en cuenta que los fallos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta, aunque aquéllas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal (Fallos: 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177, entre otros), estimo que V.E. debe hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la decisión impugnada, para que se dicte otra que revise tales fundamentos con base en los lineamientos expuestos en el apartado anterior.

Buenos Aires, 9 de SEPTIEMBRE. de 2013.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL


ADRIANA M. MARCHISIO
Prosecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación